

## Observatorio de Terrorismo

### CRIMÉRICA: UNA REGIÓN CRIMINAL

CÉSAR NIÑO<sup>11</sup>

En América Latina hay organizaciones criminales con mayor capacidad de control territorial, de agencia y de integración con otros actores, que los mismos Estados soberanos. Lo anterior se debe a varias razones.

Por un lado, a las tradicionales debilidades estatales y a las instituciones inconclusas e incompletas. De hecho, la región tiene más geografía que instituciones. Por otra parte, se debe a que si bien América Latina no tiene importantes tensiones que lleven a hipótesis de guerra entre sus Estados, es una zona con graves violencias. En otras palabras, es una región pacífica pero altamente violenta. Una tercera arista tiene que ver con que algunas organizaciones criminales disfrutaran de mejores sistemas de interlocución con otras (por ejemplo, los carteles mexicanos y grupos armados colombianos) y con algunos gobiernos (como el caso de la banda G9 y el gobierno de Haití).

El gasto del PIB de la región en seguridad y defensa fue de 1,20% en 2019 e incrementó a 1,28% en 2020, mientras que se redujo en 2,1% en 2021. América Latina es violenta, completa e insegura, pero paradójicamente pacífica. La región representa el 13% de la población mundial y el 40% de muertes violentas del planeta. Los vacíos estatales y la ausencia de Estado en ciertas zonas del continente conllevan a que aparezcan ciertos actores que hacen las veces de Estado.

En Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Paraguay, Brasil, El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Haití, entre otros, la ecuación crimen y debilidad institucional es determinante para la violencia. Incluso estructuras criminales con repertorio de violencias y de acciones terroristas se valen de sus dominios para construir órdenes sociales, administrar justicia, brindar seguridad y formular políticas públicas (el ELN en Colombia ha construido puentes en el departamento de Arauca, frontera con Venezuela). Tras la pandemia de la COVID-19, quedó aún más clara la capacidad de las estructuras criminales de adaptarse a los escenarios pandémicos y postpandémicos. Construyeron reglas de juego en diferentes territorios y hasta impulsaron políticas de restricciones a la movilidad ciudadana en aras de evitar los contagios. Hubo ciudadanos confinados tanto por la enfermedad como por la violencia. Mientras tanto, los gobiernos de la región volcaron sus esfuerzos desde un punto de vista militar y policial a contener la pandemia, una suerte de militarización desordenada que produjo Estados desconcentrados.

Para los tomadores de decisiones y operadores de seguridad de los Estados les ha sido muy difícil combatir y suprimir dichas estructuras criminales. Hay aproximadamente 436 grupos localizados en la región con capacidad de ostentar una suerte de gobernanzas criminales y política exterior subterránea que lleva a que dicha cifra se complejiza y se difumina por las acciones en red y operaciones geométricas fuera del continente. Ésta última como acción exterior en la que grupos operan en coordinación con otros extracontinentales y llevan a cabo decisiones que benefician sus intereses. Por ejemplo, los vínculos existentes entre mafias italianas con algunas centroamericanas o la compleja relación del Estado Islámico con los ciudadanos de Trinidad y Tobago en la que los trinitenses forman una importante parte de algunas de sus filas en Medio Oriente. Lo anterior se explica a partir de lógicas diplomáticas alternas y subterráneas, así como de gobiernos

---

<sup>11</sup> Profesor Asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle (Colombia) @cesarnino4.

## Observatorio de Terrorismo

criminales que permiten la construcción de legitimidades donde el Estado es extranjero en su propio territorio.

En efecto, los complejos criminales regionales alcanzan a ser una estructura lo suficientemente importante frente a los desafíos de la seguridad y defensa en América Latina. Ha sido evidente la configuración de una suerte de soberanías compartidas. Una lógica en la cual los grupos irregulares y los Estados comparten soberanía en los territorios. En muchas oportunidades, como en el caso colombiano, dicha soberanía es producto de arreglos entre élites tanto políticas como criminales y no de competencia entre ellos. En ese orden de ideas, los grupos criminales están más organizados que los Estados y gozan de facilidades burocráticas para operar sin mayores restricciones. Por aquellas razones, las agendas de investigación en materia de seguridad internacional se empiezan a preocupar por configurar nuevos marcos analíticos como el de las gobernanzas criminales, soberanías compartidas, complejos criminales de regionales, diplomacia catalítica, violencia entrópica, entre otras.